

ÍNDICE AI: ASA 16/03/97/s

NO PUBLICAR ANTES DE LAS 00.01 HORAS GMT DEL 12/02/97

MYANMAR: 1996, EL PEOR AÑO DE LA DÉCADA PARA LOS DERECHOS HUMANOS

El pasado año se produjo en Myanmar un agravamiento de la represión política, sin precedentes desde los violentos incidentes protagonizados por el ejército para reprimir la sublevación popular de los años 1988-90, ha afirmado hoy Amnistía Internacional, al mismo tiempo que ha pedido a la comunidad internacional que redoble su presión sobre las autoridades birmanas en 1997.

A lo largo de 1996, más de dos mil personas fueron arrestadas por pedir reformas en favor de los derechos humanos, se limitó gravemente la libertad de movimiento y de expresión de Daw Aung San Suu Kyi, y multitudes armadas, aparentemente alentadas por el gobierno, atacaron a miembros de la Liga Nacional para la Democracia (LND).

«El año pasado fue el peor para los derechos humanos en Myanmar desde 1990 -ha afirmado Amnistía Internacional-. 1997 ya ha comenzado marcado por las largas penas de cárcel impuestas al menos a treinta y cuatro personas detenidas después de las manifestaciones del año pasado en favor de la democracia».

Según Amnistía Internacional: «Mientras el mundo habla de 'compromiso constructivo', la situación empeora en Myanmar. Es preciso que los gobiernos que pueden influir, en especial los integrantes de la Asociación de las Naciones del Sudeste Asiático (ANSA) que se reúnen esta semana en Singapur, revisen los métodos que pueden utilizarse para presionar a las autoridades birmanas a fin de que mejore su historial de derechos humanos».

A lo largo de 1996, el Consejo de Estado para la Restauración del Orden Público reprimió, a veces con medios violentos, mítines políticos pacíficos, reuniones y manifestaciones. El Consejo de Estado ha mostrado una intolerancia casi absoluta ante cualquier tipo de actividad política pacífica. Al principio del año, el pueblo birmano podía reunirse pacíficamente todos los fines de semana para escuchar los discursos de los líderes de la LND. Al final del año, aun esto le estaba prohibido.

En mayo y septiembre, las fuerzas de seguridad arrestaron respectivamente a unos trescientos y seiscientos miembros de la LND, que se habían reunido con motivo de congresos del partido. Algunos de los arrestados continúan privados de libertad. Centenares de estudiantes y de miembros de la LND fueron arrestados a raíz de la disolución forzada de manifestaciones pacíficas de estudiantes en diciembre. Amnistía Internacional expresa su preocupación ante el hecho de que aproximadamente un centenar continúan encarcelados. Durante el año, se denegó repetidamente a Aung San Suu Kyi el permiso para salir del complejo residencial donde vive y, de hecho, la obligaron a permanecer recluida en su casa durante largos periodos.

Amnistía Internacional está especialmente preocupada ante un nuevo e inquietante suceso observado durante el año: los ataques violentos contra dirigentes de la LND. El 9 de noviembre, un grupo de unos doscientos hombres jóvenes atacaron con barras de hierro

y maderos la caravana de automóviles de Aung San Suu Kyi. Según la opinión de algunos, los agresores eran miembros de la Asociación para la Unidad, la Solidaridad y el Progreso (AUSP), grupo promovido por el Consejo de Estado para la Restauración del Orden Público, y se dijo que les habían pagado quinientos *kyat* a cada uno por participar en el ataque, presuntamente coordinado por el gobierno. Este mismo mes, Aung San Suu Kyi ha afirmado que poco antes del ataque contra su caravana un ministro del gobierno había dicho ante una reunión de miembros de la AUSP que debían matarla.

Al mismo tiempo, los medios de comunicación controlados por el Estado lanzan ataques personales cada vez más estridentes contra Aung San Suu Kyi y la LND. Se ha denegado el acceso a reporteros extranjeros independientes que querían entrevistar a miembros de la LND y, en un caso, las fuerzas de seguridad golpearon brutalmente a un periodista que cubría las manifestaciones.

En abril de 1996, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU amplió por otro año el mandato del relator especial de la ONU para Myanmar. Amnistía Internacional solicita que vuelva a ampliarse en la Comisión de Derechos Humanos de este año y pide a los Estados miembros de las Naciones Unidas, y en especial a los integrantes de la ANSA, que presionen a las autoridades birmanas para que cesen de negar el acceso al relator especial.